

Signos vitales de la 4T: crisis, pandemia y populismo

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

Una paradoja de la pandemia de COVID-19 es que siendo un fenómeno global se atiende como un problema nacional. Nos remite a una crisis múltiple de sanidad, economía, política, cultura y sociabilidad, pero que ha sido reducida a un fenómeno epidemiológico. En el imaginario político persiste el espectro de la soberanía de los Estados nación para afrontar un problema global que se expande allende las fronteras. En México, el abordaje de la pandemia, como otros problemas cruciales, ha sido errático, ambiguo y contradictorio. Su tratamiento guarda semejanza con los gobiernos populistas de Estados Unidos y Brasil, que niegan el problema. Pese al discurso de transformación social, el centro gravitacional del Estado mexicano ha sido la regeneración del presidencialismo, donde irradia la figura de un hombre fuerte sobre la sociedad civil. No obstante, la emergencia sanitaria y los problemas estructurales han puesto en predicamento el proyecto político en ciernes denominado «cuarta transformación» y a su vez han profundizado los rasgos subyacentes de una crisis civilizatoria de gran calado que develan la incapacidad estatal para atender la pandemia y su espiral de muerte; la crisis económica manifiesta en decrecimiento, desempleo y destrucción de capital; la agudización de la violencia criminal y los homicidios dolosos; la crisis del sistema educativo y el sector cultural, científico y académico, y los visos de una incipiente crisis política y de gobernabilidad que ponen en predicamento la pertinencia y continuidad del proyecto gubernamental.

Tratamiento nacional de un fenómeno global

Una paradoja de la pandemia de COVID-19 es que siendo un fenómeno de carácter global ha sido tratada como un problema de índole nacional. Asimismo, se configura como una crisis múltiple de orden sanitario, económico, político, cultural y social, pero sólo se aborda como un asunto de corte epidemiológico.

Está claro que las fuerzas de la globalización capitalista, como la interconexión de todos los países a través de los modernos medios de transporte y comunicación que agiliza el traslado de

mercancías y personas, además de la homogeneización en las pautas de producción y consumo, de los hábitos y costumbres, en conjunto permiten la fácil propagación de enfermedades infecciosas, al igual que el asentamiento de enfermedades crónicas y degenerativas asociado a los estilos de vida contemporáneos: obesidad, cáncer, diabetes e hipertensión, pero también desnutrición, malnutrición, entre otras. Una pléthora de enfermedades que conforman pandemias no contagiosas que se entremezclan y tornan más compleja las epidemias y pandemias de alcance regional y mundial. Las fronteras físicas de los

* Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México



La xenofobia estatal no sólo marca diferencia entre identidades nacionales sino también étnicas y entre clases sociales, alentado por el Estado, cuando se dice que el virus es importado de China.

Estados nacionales son vulnerables a las transmigraciones de agentes patógenos y se inoculan entre los poros de la moderna sociedad capitalista mundial, sin dejar territorios exentos.

No obstante, en el imaginario político aún persiste el espectro de la soberanía de los Estados nación como el ámbito desde el cual es posible afrontar los riesgos y peligros de un problema como la pandemia que se reconoce adquiere un alcance global, sin fronteras. Desde la configuración estatal se pretende contener la virosis en espacios acotados la propagación, sin que exista una estrategia mundial compartida y fundamentada científicamente, a no ser las disposiciones que recalcan en el comportamiento de los individuos y las familias: confinamiento, uso de cubrebocas y distanciamiento. La soberanía política estatal es un terreno pedregoso donde se guarecen intereses oligárquicos que se desdoblán, a conveniencia entre lo nacional y lo mundial, si bien prevalecen normas e instituciones que mantienen y preservan un dominio interno férreo, también se despliega una interdependencia externa, donde suelen imponerse relaciones asimétricas de poder.

Al efecto se elabora y difunde un discurso mediático según el cual el Estado asume la atribución de proteger a la ciudadanía en los ámbitos de su nación ante el peligro que significa un virus «ex-

tranjero», una amenaza que, como es usual en el discurso del poder, viene de fuera, como vienen de fuera los inmigrantes, los terroristas y otras fuerzas malignas que inoculan el sacrosanto ser nacional. Ante el temor que este discurso concita, se justifica, de nueva cuenta, la implantación de normas de protección que cierran las fronteras y se alimentan discursos y prácticas xenófobos; pero más específicamente se implementan medidas obligatorias como la clausura de actividades productivas, comerciales, educativas y convivenciales; además se despliega la vigilancia policiaca y militar, inclusive se decreta el Estado de excepción y el toque de queda, por lo que en definitiva se impone el enclaustramiento del país, el encierro nacional y el confinamiento en casa. El escenario geopolítico construido es el de países enclaustrados al amparo de la protección nacional o comarcal, donde el cierre de fronteras interiores no sólo se considera lícito y necesario, sino incluso apremiante y forzoso. La xenofobia estatal no sólo marca diferencia entre las identidades nacionales sino que también subraya diferencias de clase y segregaciones étnicas.

Cuando desde el poder hegemónico mundial se dice que el virus es importado, específicamente de China, se afilan los instrumentos ideológicos y propagandísticos del imperio, y se alienta una

animosidad xenófoba, donde el denuedo contra los extranjeros se entremezcla con el fenómeno de los refugiados o inmigrantes, en vías de cerrar las fronteras, endurecer el control de accesos y reforzar la vigilancia militar y policial. Asimismo, se desvanece la solidaridad internacional, no sólo para establecer una estrategia conjunta, en el «concierto de las naciones», que, atendiendo a criterios científicos y políticos bien fundados, permita contener y revertir en definitiva la pandemia, y facilite la reconstrucción de las instituciones sanitarias para contener las pandemias presentes y futuras. Pero el retorno al nacionalismo, impide la extensión de los lazos de solidaridad y el apoyo prioritario a los países más afectados, los subdesarrollados, puesto que prevalece el principio de competencia entre los países desarrollados, que en el marco de un mercado global, concentran los recursos científicos, las vacunas y los mayores presupuestos para contrarrestar los efectos sociales. En la competencia internacional no hay reparos éticos sino negocios, y ante la crisis humanitaria, persiste la consigna no declarada de que cada quien se rasque con sus propias uñas.

La emergencia sanitaria llegó en el momento en que se verificaba una guerra comercial ascendente entre las potencias económicas que se disputan la hegemonía mundial: Estados Unidos y China. El presidente estadounidense Donald Trump comenzó imponiendo aranceles altos a las importaciones de determinados productos chinos, además de implementar una ofensiva legal contra algunas marcas emblemáticas de su contrincante, a lo que el presidente chino Xi Jinping respondió con medidas arancelarias. Con el advenimiento de la pandemia de COVID-19 y enfrascado en la contienda presidencial, Trump no perdió la oportunidad de atribuir a China la responsabilidad en la gestación y propagación de la enfermedad al denominarla simple y llanamente el «virus chino».

Estatalidad rediviva

En este escenario, resuenan nuevos llamados a defender y reconstruir la figura maltrecha del

Estado providencial y el desmantelado sistema de sanidad pública, al tiempo que se cuestiona la política que lo reduce todo a la lógica del mercado, como es habitual en épocas de crisis. También se pronuncian discursos a favor de la alicaída soberanía del Estado nación, para erigir una fortaleza política imaginaria. Pero en el ámbito político se percibe una confusión entre la invocación a la soberanía estatal y la defensa de los servicios públicos, donde la sustracción de la sanidad pública de la lógica del mercado supondría un acto de soberanía que vendría a corregir la delegación consentida por el proyecto neoliberal.

El término soberanía (del latín *superanus*) significa «superioridad» con respecto a las leyes y obligaciones que limitan la potencia del Estado, frente a otros Estados y antes sus ciudadanos. Así, el Estado soberano se coloca por encima de los compromisos y obligaciones que es libre de contraer y de revocar a su conveniencia o, en determinados casos, por compromiso o sujeción. No obstante, el Estado, como poder político o entidad pública, sólo puede actuar mediante sus representantes, que no pueden sino encarna la razón del poder político, que condiciona el ejercicio de sus funciones. La superioridad del Estado significa entonces la superioridad de sus representantes con respecto al entramado de leyes, obligaciones y compromisos. De tal suerte que la formación de bloques regionales, como el de América del Norte (a instancias del Tratado de Libre Comercio [TLCAN] y su secuela el T-MEC) o la Unión Europea (UE) significan la delegación relativa de la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sobre todo en el segundo caso, donde hay un Parlamento Europeo donde sesionan los eurodiputados que toman decisiones obligatorias para los Estados miembros. Lo mismo puede decirse de organismos supranacionales, integrados por los Estados miembros, que toman determinadas decisiones de incumbencia regional o global, como puede ser la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus muchos organismos, incluyendo, sobre todo para el caso de la pandemia, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos internacionales en el ámbito financiero y comercial: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La fórmula general que han ensayado los Estados nacionales es el deslinde de la responsabilidad social del Estado y del capital para transferir la responsabilidad hacia los individuos y las familias mediante el disciplinamiento social y la ideología del cuidado de sí mismo.¹ Los Estados se deslindan del compromiso de organizar un sistema de seguridad social universal, servicios de salud gratuitos y de acceso universal, además de eludir la gestación de un sistema hospitalario

¹ Carlos Montaña, «Desarrollo comunitario, economía solidaria, empoderamiento y participación. Un camino para la lucha social», *Estudios Críticos del Desarrollo*, vol. IX, núm. 17, 2019.

de primer nivel, la formación de personal médico, la habilitación de infraestructura y la generación de tecnología con el respaldo de centros de investigación y una red de universidades públicas. El modelo de gestión que transfiere la función social de la salud a la órbita del mercado no sólo se constriñe al ámbito de un solo país sino que se inscribe en una ola de cambio de paradigma internacional, como parte de un consenso cuasi mundial y en el marco de una institucionalidad supranacional que lo diseña, promueve y supervisa. De igual modo, el capital elude su responsabilidad, porque su interés inmediato y único es la obtención de ganancias, y no garantizar la salud pública. En virtud de lo cual los monopolios farmacéuticos multinacionales se apropian de un cúmulo de conocimientos y productos generados por el trabajo social, los patentan, y los convierten en mercancías que se venden como marcas exclusivas, sean medicamentos, vacunas o insumos hospitalarios, y aun cuando su origen es social, sus altas rentas son privadas, en tanto que la atención de las enfermedades está siendo mediada por las normas del mercado. En contraste, los individuos y grupos familiares son señalados por las autoridades como los responsables inmediatos de contrarrestar los estragos de las pandemias infecciosas y no infecciosas, para ello les instruyen que tienen que adquirir formas de producir y consumir, hábitos y estilos de vida, que sean compatibles con la «nueva normalidad», además de hacerse cargo del cuidado de su propia salud y de adquirir medicamentos ante el desabasto y de buscar atención médica privada, si el sector público resultara insuficiente. En el caso concreto de la pandemia, las medidas enunciadas por las autoridades apelan al individualismo: lavarse las manos, usar cubrebocas, guardar distancia entre personas y quedarse en casa. No se discute la necesidad de cambiar la política estatal en materia de salud pública, junto al sistema de educación, alimentación, vivienda y trabajo. Tampoco se hace explícita la responsabilidad de las empresas en la propagación de las enfermedades debido a la fuerte carga de toxicidad y contaminación de los procesos productivos, la destrucción del medio ambiente, la producción de mercancías dañinas, el trabajo precario e inseguro, la procreación de enfermedades y el desmantelamiento del sector público que teje una red de protección social.

Entre el imperativo del capital y el de la vida

Los Estados se muestran resueltamente incapaces de contener la pandemia de COVID-19, sin mencionar a otras pandemias o epidemias de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Los gobernantes han sido sorprendidos por la crisis sanitaria al mando de una institucionalidad sanitaria desmantelada por las políticas de privatización y austeridad que limitan seriamente la capacidad estatal para atender a los enfermos de ésta y otras enfermedades, a las cuales no se les brinda la misma atención ni publicidad, pese a que sean igualmente

letales, si no es que más. La infraestructura y equipamiento de hospitales y centros de salud, además del personal sanitario y los medicamentos son notoriamente insuficientes para afrontar esta peliaguda contingencia. El origen del problema no es tanto la viralidad de la COVID-19 como la virulencia ideológica de los gobernantes adictos al neoliberalismo que se han ocupado de desmantelar y privatizar los sistemas de seguridad social. En descargo de la gestión pública, las grandes farmacéuticas controlan la investigación y desarrollo de la salud pública, incluyendo los diagnósticos, medicamentos y tratamientos.

Los Estados gestionados por políticos de izquierdas y derechas adoptan el consenso neoliberal, que para efectos prácticos se traduce en el dogma de la disciplina presupuestal, la disminución de impuestos al capital, la austeridad en el gasto, el aumento en las partidas de las fuerzas armadas y la disminución del gasto social. Esta política entraña una deuda social en materia de desarrollo social, en la medida en que se incumplen derechos sociales, se disminuye la provisión de bienes públicos y se constriñe la institucionalidad encargada de atender rubros sensibles de la reproducción social, tales como salud, alimentación, educación, ciencia y cultura, entre otros.

Contrario a la prédica ideológica neoliberal, que arguye que el Estado es así como una entidad que se reduce a las funciones de ley y orden, una entidad burocrática que entorpece el mercado, en realidad la inversión estatal en el ámbito de la innovación ha sido fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, es decir, para incrementar la productividad del trabajo. La agenda de investigación y desarrollo con fondos públicos ha redundado en mejoras tecnológicas inusitadas, pero los frutos del progreso tecnológico han sido apropiados por las grandes corporaciones privadas y con ello controlan su diseño y venta, a la vez que se apropian de incommensurables ganancias. La inversión pública del Estado, centros de investigación y universidades públicas suele ser apropiada por los monopolios farmacéuticos que patentan los hallazgos y privatizan los beneficios. Este mecanismo se ha

incentivado desde la teoría y la práctica, como la llamada triple hélice, pero más resueltamente cobra su significado en la figura del Estado capitalista como inversor estratégico.²

El Estado o los Estados no se han organizado para implementar una estrategia que diagnostique y afronte estructuralmente la pandemia y los grandes problemas de salud pública mundial. Más bien optan por políticas reactivas, defensivas y conservadoras. Por ejemplo, el cometido de «reactivar la economía» se realiza con programas de rescate y apoyo a las grandes empresas privadas, a las cuales se les atribuye el papel de generar crecimiento, empleo y bienestar, por lo que se les canalizan apoyos fiscales y crediticios, entre otras disposiciones. Asimismo, se implementan medidas de urgencia para acondicionar al mínimo el aparato hospitalario del sector público, como la «reconversión» de hospitales, la contratación temporal de más personal médico, la adquisición de equipo —como respiradores artificiales—, la compra de medicamentos y la habilitación de albergues. En menor grado, se aplican medidas como seguro de desempleo, ingreso básico universal, apoyo alimentario y, menos aún, se pone en cuestionamiento la norma neoliberal de austeridad y privatización aplicada al conjunto de los servicios públicos, destacadamente a la salud y la educación, ramos que inciden en el llamado salario social y en la dinámica de reproducción social.

El marco político de la restricción presupuestal y los límites al endeudamiento se mantienen, y constituyen el marco de posibilidades de los apoyos de emergencia, que eventualmente pudieran ser ensanchado mediante la contratación de deuda para afrontar la contingencia. De ahí que se opte preferentemente por las medidas restrictivas de confinamiento en el ámbito privado de las familias, y no en respuestas sociales de gran calado, que derivarían en reformas del Estado y en un nuevo paradigma de organización social, de sustentabilidad ambiental y de reestructuración del mundo del trabajo.

Los gobiernos de los Estados nacionales han reaccionado de manera diferenciada. Los Estados se sitúan entre la emergencia sanitaria y el imperativo económico, objetivos que aparecen, en primera instancia, como irreconciliables, y asumen un papel de arbitraje ante ese aparente dilema, que puede o no corresponder con la prescripción de la OMS y otros organismos internacionales. En ese marco, se han impuesto una variedad de políticas que pretenden responder a la pandemia, cuyo trazo general puede catalogarse como el descargo de la responsabilidad social del Estado, quien se reconoce incapaz de diagnosticar, contener y tratar a los enfermos. En definitiva, se transfiere la carga de la responsabilidad a los individuos y las familias, a quienes se les transmite la ordenanza de «quedarse en casa», de asumir la reclusión obligatoria en el hogar como la mejor medida para responder a la

pandemia; asimismo, se difunde la ordenanza de la «distancia social», que inhibe la interacción humana más elemental y cotidiana, pero también se penalizan las reuniones colectivas, desde fiestas, conciertos y celebraciones religiosas, pasando por actividades educativas y culturales, hasta movilizaciones, protestas y mítines. Entre las disposiciones que se han tomado en materia epidemiológica se puede destacar la aplicación de pruebas, el aislamiento de casos positivos detectados y el monitoreo de la red de contactos, aunado a los multicitados llamamientos para el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico y la higiene personal, sin omitir el confinamiento obligatorio y el toque de queda en los casos más extremos. La variedad de disposiciones adoptadas por las autoridades de los diversos países puede catalogarse en cuatro tipos, no necesariamente excluyentes entre sí: el autoritarismo, el paternalismo, la indiferencia y la negación.

a) Medidas autoritarias. El Estado asume un papel central en el diseño, ejecución y vigilancia de la estrategia de contención de la pandemia, con medidas coercitivas, disciplinamiento social y vigilancia cibernética. En China, país donde presuntamente se registró el origen mismo de la pandemia de COVID-19, particularmente en las ciudades de Wuhan y Hubei, se implementó una estrategia de aislamiento total de los portadores del virus y el confinamiento absoluto. Las ciudades fueron cercadas virtualmente. En otros países asiáticos, como Corea del Sur, también se implementaron medidas similares, entre las que se incluyen el rastreo sistemático, aislamiento de portadores del virus y «distancia social». En esa sintonía, en Italia se decretó el confinamiento absoluto. Las medidas autoritarias corresponden a una suerte de dictadura sanitaria, reforzada con vigilancia militar y policial de los espacios públicos, donde se impone la norma de la disciplina social. Los Estados que responden con medidas más duras decretan un «Estado de emergencia», como ha sucedido en Italia, España y Francia, o formas no declaradas de un «Estado de excepción» o «toque de queda», que pueden no ser declarados, pero la vigilancia militar y policial,

² Mariana Mazzucato, *El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado*, Barcelona, RBA, 2014.



además de la cibervigilancia, se utilizan como dispositivos para una férrea gobernabilidad con disciplinamiento sanitario que impide el libre tránsito, la libre manifestación, la libertad de reunión, incluyendo la restricción a la libertad de movimiento y de trabajo.

b) Medidas paternalistas. La política contenciosa impuesta por los gobiernos nacionales ha sido la del confinamiento y la disciplina social (uso del cubrebocas, «distancia social», reclusión, etcétera). Dentro de ese marco, se trata de una disposición propia del «paternalismo libertario», según el cual el Estado ayuda a los ciudadanos a tomar las mejores decisiones personales en un ámbito donde prevalece la voluntad, es decir, se influye en la conducta de los individuos, pero no se cancela la libertad de elección. Se pretende concitar que los ciudadanos tomen las decisiones correctas mediante estímulos suaves donde el ciudadano asume que toma decisiones libremente. Esto se traduce en la posibilidad de asumir de buen grado los nuevos hábitos como mantener la distancia, lavarse las manos, retirarse si tose, es decir, se trata de medidas individuales que se toman de manera defensiva, como la mejor manera de protegerse. No se interpretan como medidas restrictivas, sino como prácticas individuales para erigir una barrera, que sin embargo no han resultado suficientes ante la propagación de la epi-

demia. Los gobernantes se presentaban en actos públicos como si con ello negaran la gravedad del problema y anteponían el imperativo económico al problema epidemiológico, bajo el argumento de que una medida constrictiva no sería asumida por la población en los momentos de mayor tensión y ante la tentativa de que el problema económico se agravara.

c) Medidas omisas o indiferentes. La estrategia de gestión epidemiológica conocida como la «inmunidad colectiva» (*herd immunity*) o «inmunidad del rebaño» responde a una visión cínica o fatalista, en tanto alude a una especie de selectividad natural según la cual «mueren los que tienen que morir»: los más débiles y enfermos, los más viejos, los que ya no tienen asignado un papel social que desempeñar. Esta modalidad puede explicar la pasividad inicial de algunos gobiernos, como el de Gran Bretaña, en contraste con otros que optaron por medidas restrictivas inmediatas, como los de Francia y Alemania. Los estrategias de la «inmunidad del rebaño» confían en que el contagio colectivo genera las defensas o inmunidad que habrá de traducirse en un «retardo», una «atenuación» o un «aplanamiento de la curva de contagio». Por ello renuncian a implementar medidas de control y seguimiento como el rastreo sistemático y el confinamiento de la población. Su concepción de selectividad

Líderes populistas negacionistas, adscritos al pensamiento mágico, de raigambre religiosa, con posturas antiintelectuales, reacios a los aportes científicos, propensos a exaltar su personalidad, ideas propias y ocurrencias: Donald Trump de Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés López de México y Boris Johnson de Gran Bretaña.

darwiniana les permite justificar que una gran parte de la población (entre 50% y 80%) llegue a contraer el virus y con ello admitir la muerte de un número indeterminado de personas (pueden ser centenares de miles o millones de personas) entre los que de todos modos se iban a morir, como los que ya tenían enfermedades crónico-degenerativas, los más viejos o los improductivos.

d) Medidas negacionistas. Una variante de los omisos e indiferentes son los líderes populistas negacionistas, embelesados en el ejercicio de su poder personal, indiferentes ante los problemas reales de la sociedad. Se trata de los líderes adscritos al pensamiento mágico, de raigambre religiosa, con posturas antiintelectuales, reacios a los aportes científicos, propensos a exaltar su personalidad, prejuicios, ideas propias y ocurrencias. Es el caso de los gobernantes populistas más estridentes, como Donald Trump de Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés López de México y Boris Johnson de Gran Bretaña. Estos presidentes llegaron a la presidencia con un discurso populista de derechas o de izquierdas-derechas, sin ser parte del núcleo duro del poder político y diciendo representar los intereses del pueblo frente a la élite gobernante. En lo tocante al coronavirus, contraviniendo a las recomendaciones de científicos, se muestran renuentes a adoptar las medidas de control y utilizan sus desplantes personales para negar el problema: no usan el cubrebocas, se reúnen con sus seguidores en mítines públicos, dicen estar protegidos contra el contagio, etcétera. No en balde, la indolencia gubernamental se traduce en el hecho de que los países que dirigen están entre los primeros 10 con más casos de afectación por la pandemia. Por tanto, ejercen un liderazgo negligente.³

Militarismo y espacio público

Un hecho sintomático de la pandemia es la disputa por el espacio público. Antes de la pandemia, acontecían movilizaciones masivas de protesta ciudadano contra sus gobiernos por diversas causas en Hong-Kong, Iraq, Chile, Ecuador, Colombia, Líbano, Francia, Estados Unidos y México, entre otros. Sin embargo, las medidas restrictivas impuestas contribuyeron a vaciar las calles y a despresurizar las presiones políticas que padecían los gobiernos. Las calles vacías ahora son resguardadas por policías, guardias nacionales y ejércitos. Incluso, algunos gobernantes han declarado que esto es una «guerra»,⁴ para justificar la militarización, como si el virus fuese un ejército de ocupación ene-

miga que se tuviera que combatir con las fuerzas armadas y policiales.

Sea como fuere, estas medidas de fuerza sirven para restringir las libertades individuales, la libertad de manifestación, sobre todo a los gobernantes que han estado brindando mayores potestades y un papel renovado a los militares, lo cual redundará en el cierre de fronteras a la migración y la exaltación del nacionalismo, en contraposición a las libertades democráticas y la cooperación internacional.

La presencia de fuerzas militares realizando funciones policiales del orden civil no sólo rebasan sus marcos institucionales y funciones, sino que contrarrestan las libertades individuales y la democracia, particularmente en los casos donde las fuerzas castrenses tienen influencia política en los gobernantes.

En Estados con debilidad institucional, colocar a las fuerzas armadas en el desempeño de funciones civiles, como la seguridad ciudadana, la producción y distribución de medicinas, el manejo de la crisis sanitaria, entre otras, convierte al régimen político en militarista y menos democrático. Y eventualmente hace más complicado que el ejército retorne a sus funciones básicas. Un escenario como este plantea una tensión entre, por una parte, el autoritarismo y el militarismo, y, por la otra parte, la libertad ciudadana, los derechos humanos y la democracia.

El Estado de excepción está previsto en diversas constituciones de países reputados como democráticos, para afrontar catástrofes como la pandemia, y las fuerzas armadas pueden ser convocadas a colaborar. El problema es dilucidar si es legítimo declarar Estado de excepción y extralimitar las funciones de las fuerzas armadas. En todo caso el desafío es establecer controles sobre los militares desde los poderes civiles y democráticos.

Tentaciones autoritarias

El autoritarismo político se presenta en aquellos casos donde los gobernantes se arrojan mayores facultades, centralizan el poder, disminuyen los contrapesos, anulan la división de poderes

³ Júlia Alsina, «Bolsonaro, Trump, AMLO y Johnson, el liderazgo negligente», en Antoni Gutiérrez-Rubí y Carles Pont Sorribes (coords.), *Comunicación política en tiempos de coronavirus*, Barcelona, Cátedra Ideograma-UFP de Comunicación Política y Democracia, 2020, pp. 60-66, en <https://www.upf.edu/documents/220602201/233560922/J%C3%90LIA+ALSINA.pdf/b8e5729d-8ad6-4838-756e-bb5419cfed2e>

⁴ Marina Sardiña, ««Estamos en guerra sanitaria»: Macron anuncia medidas para enfrentar el COVID-19», *France 24*, 16 de marzo de 2020, en <https://www.france24.com/es/20200316-macron-francia-coronavirus-medidas-guerra-sanitaria>

y diluyen las libertades individuales. El alegato que pretende justificar esa determinación es que requieren centralizar las decisiones y facultades en el poder ejecutivo que representan, y que de hecho quisieran encarnar sin contrapesos. Estos gobernantes de cariz autoritario pueden tener gran arrastre popular, ser carismáticos, gozar de una sobreexposición mediática, y aspirar, en todo momento, a ser hombres fuertes, incontestables.

El ejercicio unipersonal del poder alimenta la tentación de gobernar por decretos, invertir por adjudicación directa, gobernar con el ejército, imponer su visión del mundo, denostar a la crítica, anular el contrapeso parlamentario, cooptar al poder judicial, domeñar a la prensa, dictar la agenda pública de discusión, desviar la atención de problemas estructurales, lanzar escándalos mediáticos, tomar decisiones de manera pragmática y anteponer la popularidad individual a los grandes problemas sociales.

Desvaríos populistas

El populismo se define como un movimiento político que apela al «pueblo», la «gente», en contraste con las «élites» o el «*establishment*», desde una perspectiva que omite a las clases sociales y se puede inclinar hacia la izquierda o la derecha del espectro político. La ambigüedad ideológico-política es un terreno fértil para los objetivos políticos que se valen del juego de equilibrios y la administración de los conflictos. La proposición básica es la del pueblo contra los poderosos. No postula un programa político específico, sino que se orienta a determinados temas, como la corrupción o el nacionalismo. Su discurso es de tintes moralizantes en torno a la defensa del pueblo frente a los intereses perversos de los poderosos, sean nacionales o multinacionales. Opta por un estilo directo e inmediato, que prescinde de organizaciones intermediarias, sean partidos o instancias de participación democrática o instituciones. Su noción de sociedad es dicotómica y tiene como referente la imagen de un enemigo. En ese marco, el pueblo siempre tiene la moral de su lado, pues representa a la mayoría de la sociedad.⁵

La fuerza del líder carismático, que dice encarnar al pueblo, se basa en su moral, en sus ideas personales, que son refractarias al conocimiento científico, al saber experto, al estudio detallado de los problemas. Basta con las intuiciones, la tradición y los preceptos religiosos.

Por si fuera poco, la palabra pandemia significa «reunión del pueblo», pero para efectos epidemiólogos significa la propagación de una enfermedad viral. Frente al problema pandémico del coronavirus, los líderes populistas asumen posiciones semejantes: negación de la pandemia, descreimiento de los hallazgos científicos, renuencia a adoptar medidas de contención y tratamiento, preeminencia de los

intereses económicos sobre la vida concreta de las personas y exaltación de la gestión de su propia administración. A continuación, se reproduce un catálogo de perlas declarativas de los líderes populistas negacionistas:

⊕ Trump, presidente de Estados Unidos: «Tenemos todo bajo control»; «el remedio puede ser peor que la enfermedad»; «nuestro país no está diseñado para cerrar»; es suficiente «con que se laven las manos más veces»; el coronavirus «muere con el calor».

⊕ Bolsonaro, presidente de Brasil: «Es apenas una pequeña gripe o resfriado»; «va a morir gente, lo siento, pero no podemos parar una fábrica de autos porque hay un accidente de tránsito»; «acompañamos a pastores y religiosos para anunciar que pedimos al pueblo brasileño un día de ayuno en el nombre de Brasil, libre de este mal lo antes posible»; «lo que está sucediendo en el mundo muestra que el grupo de riesgo está compuesto por personas mayores de 60 años. Entonces, ¿por qué cerrar las escuelas cercanas? Raras veces los casos fatales son de personas sanas menores de 40 años»; sobre las muertes: «¿Y qué? Lo siento. ¿Qué quieres que haga? Soy un Mesías, pero no hago milagros».

⊕ López, presidente de México: «Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo»; «nos vino como anillo al dedo»; «si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes»; «miren lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada... así... nada de confrontación, de pleito»; «no apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejar de salir. Todavía estamos en la primera fase (...) sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas»; «vamos bien porque se ha podido domar la epidemia, en vez de que se disparara (...), aquí el crecimiento ha sido horizontal»; «me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo?, cuando

⁵ Peter Imbusch, «Populismo», *InterAmerican Wiki*, Universität Bielefeld, 2012, en [www.uni-bielefeld.de/\(es\)/cias/wiki/p_Populism.html](http://www.uni-bielefeld.de/(es)/cias/wiki/p_Populism.html)

no haya corrupción ya»; sobre los muertos: «Ya (hay) muchos aquí en nuestro país, más de 60 mil fallecidos, sin embargo, va la pandemia cediendo».

⊕ Lukashenko, presidente de Bielorrusia: «No hay virus aquí. No lo has visto volar, ¿verdad?»; el miedo al coronavirus es «nada más que una psicosis».

⊕ Mnangagwa, presidente de Zimbabue: «El coronavirus es la obra de Dios para castigar a los países que nos han impuesto sanciones».

⊕ Johnson, primer ministro del Reino Unido: «Estaba en el hospital la otra noche donde creo que había pacientes con coronavirus y les estaba estrechando la mano a todos».

⊕ Macron, presidente de Francia: «Estamos en guerra».

Para finales de julio de 2020, el *ranking* de muertes por el virus SARS-CoV-2 estaba encabezado por los países gobernados por líderes populistas, negacionistas y negligentes: en primer lugar se encuentra Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump con 156 mil muertes; en segundo lugar Brasil, con Jair Bolsonaro, con 92 mil 475 muertes; en tercer lugar México, con Andrés López, con 46 mil 688 muertes; y en cuarto lugar Reino Unido, con Boris Johnson, con 46 mil 119, según los datos del Panel Público de COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins. Estos datos se actualizan día con día y las posiciones pueden cambiar, pero muestran un desempeño nocivo y catastrófico para la sociedad de estos gobernantes, más allá de su letanía discursiva autosuficiente.

No deja de ser sintomático que en el concierto de una pandemia mundial haya países que sin embargo no padecieron prácticamente los estragos de la propagación del coronavirus o lo lograron controlar a tiempo sin mayores bajas en pérdidas humanas, como ha sido el caso de Finlandia. El punto es que los países con menor incidencia han tenido una respuesta institucional y científica. En contraposición a los gobiernos negacionistas o negligentes que dejaron que la inercia decidiera, a querer o no, «que se mueran los que se tengan que morir». La diferencia es que la responsabilidad no se descarga en el individuo y las familias, sino que se asume como asunto de Estado, se fundamenta científicamente y se organiza socialmente. Para ello, obviamente, se tienen que destinar recursos presupuestales y fortalecer las capacidades institucionales en materia de salud, empleo, inversión y desarrollo.

Los países nórdicos (Islandia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, con excepción de Suecia) lograron frenar la pandemia mediante una estrategia de atención temprana que combina ciertas restricciones pero con la aplicación de pruebas, rastreo de cadenas de contagio, aislamiento de los infectados y cuidados médicos a quienes lo requieran. En Islandia, por ejemplo, la política fue la aplicación masiva y gratuita de pruebas.

México, un galimatías mórbido

«Pórtense bien»

En México, el abordaje de la pandemia ha sido errático, ambiguo y contradictorio, a semejanza de lo que ha sucedido en Estado Unidos y Brasil, precisamente en un momento donde se esperaba que el gobierno de López Obrador impulsara un cambio sustancial en el Estado, el gobierno y la sociedad, según su promesa de la «cuarta transformación». Sin embargo, su gobierno, más que en un proyecto de transformación social, se basa en un liderazgo a la usanza de los caudillos priistas de viejo cuño con tintes mesiánicos, que asume rasgos bonapartistas o populistas. El centro gravitacional es la figura dominante del presidencialismo sobre la sociedad civil, donde irradia un aspirante a hombre fuerte, que espera el seguimiento de sus ideas y propuestas a pie juntillas, sin admitir la crítica.

En el caso de la epidemia de coronavirus, el presidente ha seguido el comportamiento de otros presidentes derechistas y populistas, como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Boris Johnson, quienes en definitiva niegan la existencia de la pandemia: no siguen las recomendaciones de usar cubrebocas, no creen en las recomendaciones de los científicos, suponen que su intuición es superior y confían en que la gente debe seguirlo sin cuestionar. No contento con ello, el presidente mexicano exhibe imágenes religiosas como amuletos que lo protegen, se mofa de la pandemia diciendo que «no pasa nada, hay que abrazarse», o que le cayó «como anillo al dedo» para sus propósitos políticos, y además ha expresado con sorna que la pandemia «está domada». El presidente López ha hecho caso omiso de la pandemia y en marzo de 2020, como antes y después, seguía haciendo su vida normal y compelia a las familias a «salir a comer fuera».

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatlí, quien ha sido la voz cantante en la gestión de la pandemia —pues el secretario del ramo, Jorge Alcocer, no asume su papel, y cuando lo hace sigue con el rosario mágico discursivo: «México está con buen pulso y sin arritmias»—, le ha robado

popularidad y presencia pública mediática al mismo presidente, pero se ha mostrado condescendiente con su jefe supremo defendiéndolo y arguyendo que su «fortaleza es moral» y que está protegido contra el riesgo de contagio, por lo que realizarle una prueba «no tendría ninguna lógica científica».⁶ También ha dicho que no está demostrado científicamente que el cubrebocas contenga el contagio, en contra de la prescripción de la OMS y de innumerables epidemiólogos y científicos. En tanto que el presidente es negacionista, su vocero epidemiólogo se adhiere a la estrategia de «inmunidad del rebaño» y está a la espera del «aplanamiento de la curva» de contagios, mediante lo cual se supone que habrá contagios entre la población que a la postre desarrollará inmunidad y resistencia biológica, es decir, la propia interacción humana generaría barreras, sin necesidad de que el Estado y sus instituciones tengan una intervención relevante. El funcionario había previsto que un escenario «catastrófico» sería si México llegara a registrar 60 mil muertes por la pandemia,⁷ pero ese umbral ya se rebasó y ha superado los 80 mil, según las propias cifras oficiales, sin ninguna consecuencia política ni autocrítica.

En uno de los documentos más controversiales, para atender la contingencia, el presidente López Obrador emitió el «Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad»⁸, que contempla, entre otras medidas: «Mantener una actitud positiva; no dejarse envolver por lo material y evitar el consumismo; cuidar la salud, bajar de peso y vivir <sin angustias>; estar informado sobre la opinión de los expertos, y buscar el camino hacia la espiritualidad, amar a la naturaleza y a la patria». En ese documento plantea que la población «siga su propio criterio» en la aplicación de las medidas sanitarias para afrontar el problema de contagio de COVID-19, tenga buenos pensamientos, se porte bien, entre otros consejos moralistas. Una prédica conservadora de corte religioso que propala como solución mágica a cualquier problemática social emergente.

Austeridad letal

En vez de promover una estrategia estatal y gubernamental para reforzar los servicios de salud pública y fortalecer el «Estado social», como era de esperarse de un gobierno cuando menos reformista, se ha continuado profundizando a rajatabla el dogma neoliberal de la austeridad, es decir, el mantenimiento del superávit presupuestal

sin incremento de impuestos al gran capital, la reasignación del presupuesto hacia proyectos insignia del gobierno, el pago garantizado de la deuda y el reforzamiento de las partidas al sector militar, a costa del recorte de programas, proyectos y empleos del sector público, con ajustes al gasto social, la carga tributaria al grueso de los contribuyentes, el desempleo y la contención salarial.

Por obra de la austeridad neoliberal (rebautizada como «republicana»), se han realizado recortes y subejercicios de los recursos presupuestales en prácticamente todas las áreas de la administración pública. Por decreto, se recortó 75% del presupuesto de las dependencias gubernamentales, que mina los servicios públicos y las capacidades institucionales, no sólo del sector salud, sino también de educación, ciencia, tecnología y otras áreas sensibles del capítulo social, sin contar con el económico. Además, los subejercicios, que llaman «ahorros», representan gastos programados no ejercidos por el gobierno.

Insospechadamente, en el contexto de la pandemia de COVID-19, en lugar de reforzar al sector salud, el gobierno siguió con su visión dogmática y ordenó un recorte de mil 844 millones de pesos a la Secretaría de Salud, entre enero y mayo de 2020. Además en esa dependencia, como en las demás, se incurre deliberadamente en el no gasto de recursos programados, que para este mismo año representan 10% del monto asignado. Debido a ello, el gobierno coarta sus capacidades institucionales y elude su responsabilidad social de, en este caso, hacer pruebas masivas, habilitar hospitales, proteger al personal médico y desplegar una estrategia clara para contener las muertes, más allá de las conferencias diarias sobre la gráfica de muertos y contagios o el llamado semáforo de riesgo epidemiológico nacional. El presupuesto asignado a salud bajó, desde su nivel más alto de 2.8 del PIB a 2.4.

Cuando el gobierno de México se vio obligado a adoptar la estrategia del confinamiento con la declaratoria de «quédate en casa», y ante la consecuente propagación del desempleo, el cierre de empresas, el desplome de la economía y el

⁶ Alberto Morales, «La fuerza del Presidente es moral, no es fuerza de contagio», *El Universal*, 16 de marzo de 2020, en <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/la-fuerza-del-presidente-es-moral-no-es-una-fuerza-de-contagio>

⁷ Hugo López Gatell, «En escenario muy catastrófico se estimó hasta 60 mil muertos por COVID-19: López-Gatell», *Milenio*, 4 de junio de 2020, en <https://www.youtube.com/watch?v=r10M6k-kGM4>

⁸ Andrés Manuel López Obrador, «Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad», 13 de junio de 2020, en <https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Deca%CC%81logo-para-salir-del-coronavirus-y-enfrentar-la-nueva-realidad.pdf>

empobrecimiento, el gobierno siguió obstinado en la austeridad a rajatabla con el recorte de 75% del presupuesto federal y sin canalizar recursos estratégicos para la atención de la población afectada. México no dispone de seguro de desempleo ni de ingreso básico universal ni de apoyo alimentario; pero tampoco se realizaron diagnósticos, monitoreo a infectados y atención integral y universal a todos los enfermos por la pandemia y por otras enfermedades subyacentes.

El miedo y la desinformación o, en su defecto, la confusión, son los instrumentos más preciados para quienes gestionan la crisis, pero esa política tiene un elevado saldo mortífero.

Salud pública a la deriva

La política sanitaria nacional ha sido inconsistente y tiene como trasfondo la inexistencia de un servicio de salud universal, sino más bien presenta una profunda inequidad. En México, el gasto para la prevención de enfermedades es insuficiente; al respecto el mayor gasto promedio por derechohabiente es del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que alcanza 390 pesos, tan sólo 21% de lo que se realiza entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desa-

rollo Económicos (OCDE), pero en la Secretaría de Salud es de 113 y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 98 pesos. La prevención de la salud incluye la vigilancia epidemiológica, vacunación, protección contra riesgos sanitarios, control de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades de transmisión sexual. El gasto también es insuficiente para cubrir el Catálogo único de Servicios de Salud del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro Popular.

La desinversión gubernamental parece querer legitimarse en el dicho insistente del presidente mexicano, un izquierdista con talante conservador: «La familia es la mejor institución de seguridad social».⁹ Con tamaña expresión pretende justificar la incapacidad del Estado para afrontar el problema de la violencia, del trabajo de cuidado en guarderías y de la insuficiencia de los sistemas de salud. La tónica es la transferencia de la responsabilidad del Estado y el capital hacia los individuos y las familias, circunstancia que afecta más a las familias pobres.

⁹ Andrés Manuel López Obrador, «Presidente electo presenta Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024», 14 de noviembre de 2018, en <https://lopezobrador.org.mx/2018/11/14/presidente-electo-presenta-plan-nacional-de-paz-y-seguridad-2018-2024/>

La política de «quédate en casa» no sólo se aplicó a la población sana sino también a la enferma. Los hospitales comenzaron a negar los servicios a los pacientes y los orillaron a recluirse en sus hogares, donde se acrecentó el número de muertos y el empeoramiento de las condiciones de vida de los enfermos.



La política de cierre de actividades declaradas «no esenciales» detona otros problemas sociales, como el desempleo, la pobreza, las enfermedades, el hacinamiento, el estrés, etcétera. El confinamiento y sus secuelas no se acompaña de medidas mínimas de protección social, como pudiera ser la activación de un seguro de desempleo, un ingreso básico universal, la provisión de alimentos, la aplicación de pruebas, la elaboración de diagnósticos, el seguimiento de casos, la implementación de estrategias para romper las cadenas de contagio, la atención médica a los enfermos, la habilitación de hospitales, la apertura de centros de detección y atención para casos epidemiológicos, la garantía de atención a enfermos crónico-degenerativos y el abasto de medicamentos.

El gobierno de México, obsesionado con los recortes presupuestales, además incurre en subejercicios en el gasto público, y uno de los sectores más castigados ha sido el de salud, circunstancia que se mantiene durante la pandemia: gastó menos que el año anterior.

La política sanitaria es un galimatías. El presidente niega la pandemia y recomienda abrazarse y salir, a la vez que no acepta el uso de cubrebocas, en tanto designa al subsecretario de Salud como vecero especial del tema, quien por su parte se adhiere a la política oficial internacional de confinamiento y «sana distancia», pero no al uso de cubrebocas. No obstante, desde la Presidencia se emiten mensajes confusos entre un presidente negacionista y un vocero oficioso, que confunden a la población. Cuando hay un viraje y se adoptan las medidas de contención de la pandemia que replican las recomendaciones internacionales, simplemente se orientan hacia lo más sencillo, la responsabilidad de sí mismo: «Quédate en casa», lavarse las manos, usar cubrebocas, distancia social y cierre de actividades «no esenciales».

Por su parte, los gobiernos de los estados de la República, sobre todo los del bando opositor, toman iniciativas que se adelantan a la Presidencia en materia de confinamiento, uso de cubrebocas y sana distancia; a la vez que entablan una po-

lémica abierta con el presidente. El tema se partidiza y termina por negociarse los colores del semáforo epidemiológico.

La 4T en cuarentena

La emergencia sanitaria y los problemas estructurales subyacentes han recrudecido la crisis civilizatoria en el país y en el mundo. Al respecto, a continuación se desglosan cinco rasgos críticos.

1. Crisis sanitaria: desmoronamiento del sector salud y espiral de muertes

El dato más apremiante es el de las muertes derivadas o asociadas a la pandemia de COVID-19. Las cifras oficiales muestran que 83 mil 642 personas han muerto y que más de 814 mil se reportan como «casos» que han dado positivo (10/10/2020). Este dato supera con creces el umbral «catastrófico», proyectado como improbable, por el gobierno mexicano. Las estimaciones independientes sugieren que el saldo fúnebre podría alcanzar una cifra cercana a las 175 mil muertes.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, los muertos a nivel nacional por COVID-19 en México, a principios de agosto de 2020, son de alrededor de 49 mil con una tendencia al alza. El país se ubica en tercer lugar mundial en este rubro, sólo atrás de Estados Unidos y Brasil. Como ocurre con datos sobre muerte, hay mucha controversia sobre su veracidad, porque se considera la existencia de una cifra negra de muertes, es decir, muertos no contabilizados en las estadísticas oficiales, ya sea por subregistro, deficiencias en el levantamiento de datos o encubrimiento de la realidad. Los analistas independientes estiman que hay un factor multiplicador de dos o tres por cada número oficialmente reportado. A su vez, se han hecho ejercicios de cotejo de actas de defunción donde se advierte un crecimiento inusitado de muertos que supera la dinámica demográfica previsible y que no tiene reflejo en la numeralia oficial. Ello se refleja en un déficit de actas de defunción en el país de 150 mil.¹⁰

La política de «Quédate en casa» no sólo se aplicó a la población sana sino también a la enferma. Los hospitales comenzaron a negar los servicios a los pacientes y los orillaron a recluirse en sus hogares, donde se acrecentó el número de muertos y el empeoramiento de las condiciones de vida de los enfermos. A toda costa, se quería mantener el indicador de «camas disponibles» que estaban vacías, como una muestra sobrada, pero artificial, de capacidad hospitalaria para recibir a enfermos de COVID-19, que en buena medida eran rechazados. Además de que se esparció el temor entre la población de que el ingreso a un hospital era tanto como firmar su acta de defunción anticipada.

¹⁰ Luis Rodríguez, «Cifra negra de muertes por COVID podría ser de 100 mil más», *ContraRéplica*, 4 de septiembre de 2020, en <https://www.contrareplica.mx/nota-Cifra-negra-de-muertes-por-COVID-podria-ser-de-100-mil-mas20204952>

Una pauta de comportamiento de las muertes por COVID-19 ha sido la selectividad por rangos de edad y condición socioeconómica. Desde una visión contextual, México es un país con un potencial sindémico muy elevado, debido a las condiciones de pobreza, deterioro del sistema de salud pública y la proliferación de enfermedades cardiometabólicas y enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer. Las condiciones de pobreza generalizada en zonas urbanas y rurales del país se entremezclan con el riesgo de contagio de COVID-19 junto a otras enfermedades preexistentes o latentes. La mortalidad por COVID-19 a nivel nacional es de 37 por 100 mil habitantes, en tanto que en los municipios con mayor incidencia de pobreza la cifra se eleva a 52 por cada 100 mil habitantes. Además de la pobreza, los bajos niveles de escolaridad son receptáculo de una mayor virosis letal: entre los muertos por COVID-19, 71% cuenta apenas con escolaridad básica, es decir, con primaria o menos.

En el conjunto nacional, también se han acrecentado las muertes por otras enfermedades no vinculadas a la pandemia, pero igualmente letales. Es el caso de pacientes que fueron desatendidos por las prioridades hospitalarias fijadas por la emergencia sanitaria o porque contrajeron la COVID-19 estando enfermos y sus defensas biológicas estaban minadas.

2. Crisis económica: un frío cálculo desde el escritorio

Según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, México enfrenta «una crisis por diseño. Es decir, es el resultado de una decisión consciente de utilizar el confinamiento para luchar contra la dispersión del nuevo coronavirus, asumiendo las graves consecuencias».¹¹ Dicha forma de adaptar la realidad a la propaganda gubernamental genera confusión y posterga la solución de la problemática. Los efectos del confinamiento son inmediatos: la desvalorización de la economía con el cierre y quiebra de empresas, el desempleo, la caída en el ingreso de las familias, el desplome del consumo y la inversión. Pero México ya estaba inmerso en una crisis de bajo crecimiento, inseguridad, desempleo, bajos salarios y pobreza. La emergencia sanitaria sólo vino a profundizar los problemas y ha generado una espiral descendente.

Según el FMI, México será una de las economías más golpeadas del mundo como secuela de COVID-19 y prevé una caída de 10.5% del PIB, mientras que a nivel mundial la caída será de 4.9%.¹² La expectativa de recuperación es de 11 años o más.

¹¹ «México enfrenta una crisis económica <por diseño>», *Forbes*, 6 de octubre de 2020, en <https://www.forbes.com.mx/mexico-enfrenta-una-crisis-economica-por-diseño-secretario-de-hacienda/>

¹² Leticia Hernández, «Economía mexicana será de las más golpeadas del mundo por COVID-19, según el FMI», *El Financiero*, 24 de junio de 2020, en <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5>

El cierre de empresas, sobre todo pequeñas, ha sido una constante. Según los datos del IMSS, en dos meses cerraron cerca de 10 mil empresas, a partir de la disminución del número de patrones dados de baja. Esta mortandad empresarial es semejante a la verificada en la última crisis económica de 2018. Debido, sobre todo, al cierre de actividades «no esenciales» y, en menor medida, a la disminución de actividades de comercio exterior con el recorte de actividades de suministro de las cadenas globales. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que unas 500 mil empresas formales están en peligro de desaparecer, sobre todo del sector de comercio, turismo, manufactura, maquiladoras, construcción e industrias culturales.¹³

La pérdida de empleos es el dato crudo más evidente. En México se perdieron 12.5 millones de empleos tan sólo en el mes de abril de 2020, cuando la población ocupada pasó de 55.7 millones en marzo a 45.4 millones en abril, y los nuevos desempleados no tienen ingresos ni certeza de volver a trabajar, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). En México, de acuerdo con INEGI, 13 millones perdieron su empleo sin posibilidad de buscar otro, 12 millones están subempleados y 9 millones reportan ausencia temporal.

En este periodo, alrededor de 600 mil trabajadores se quedaron sin empleo y sin recibir ingresos, con la incertidumbre de volver o no a laborar, conforme a INEGI. Pero las estimaciones de Cepal son de que se podría generar el desempleo de un millón 573 mil trabajadores formales.

El propio gobierno sufrirá una significativa caída en la recaudación tributaria, tan sólo en abril fue de 7.6%. El más significativo es el declive del rubro de impuesto sobre la renta, vinculado a la actividad empresarial y laboral, con una caída de 26% anual. En conjunto, los ingresos del gobierno disminuyeron 19%. Por si fuera poco, los ingresos petroleros se desplomaron 73.8%, en un contexto de baja de las cotizaciones y descenso de la demanda mundial.

¹³ Cepal, *Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación*, Santiago, Cepal, 2020.

Pese a que el gobierno no ha contratado deuda, el endeudamiento de México también se ha incrementado sensiblemente debido a la baja actividad económica. En un año ha crecido 1.51 billones de pesos para ubicarse en un nivel histórico de 52.1% del PIB.

Mientras se enfrentaba el problema más agudo de la pandemia, por solicitud de Estados Unidos se abrieron las maquiladoras automotrices, donde los obreros han estado expuestos a los contagios y muertes.¹⁴

3. Crisis de seguridad: las otras muertes y el militarismo

El gobierno de la 4T se ha caracterizado por asumir un rostro militarista. Ha realizado diversos cambios legislativos para crear un marco jurídico que amplíe las funciones de las fuerzas armadas y les brinde protección legal. Entre otras, destaca la creación de la Guardia Nacional, una fuerza militar que cumple funciones de policía civil. La Guardia Nacional ha sido utilizada como policía antiinmigrante y una fuerza de contención de movimientos sociales, como ha ocurrido en la presa la Boquilla, en Chihuahua, que sin embargo fuera expulsada por los agricultores que reclaman el derecho al agua para cultivo. Además se han concedido incrementos sustanciales al presupuesto del sector militar, siendo para efectos prácticos el único sector no subordinado al flagelo de la austeridad, además de que se le han otorgado papeles económicos como inversionista y constructor de las megabras sexenales.

Sin embargo, las cifras de violencia siguen al alza y alcanzan récords históricos. En los primeros 20 meses de gobierno de la 4T se han registrado 60 mil asesinatos, la mayoría con armas de fuego, un

¹⁴ «Maquiladoras de la Frontera Norte consideradas no esenciales reactivan actividades», *Animal Político*, 5 de mayo de 2020, en <https://www.animalpolitico.com/2020/05/maquiladoras-frontera-norte-no-esenciales-reactivan-trabajo/>; Rubén Villalpando y Jesús Estrada, «Han muerto en Ciudad Juárez 104 obreros de maquiladoras», *La Jornada*, 8 de mayo de 2020, en <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/08/han-muerto-en-ciudad-juarez-104-obreros-de-maquiladoras-7063.html>

promedio de 100 diarios, que supera con creces a sus antecesores. Los feminicidios también se han incrementado en 9.4%. El 2020 se consolida como el año con más reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad. También se registran 429 masacres y 404 casos de tortura y diversos hechos (2 mil 582) catalogados como «atroces» con 3 mil 383 víctimas. Además de que continúan los asesinatos de periodistas, aunado al hecho de que también han muerto 877 policías y políticos en funciones gubernamentales en los municipios.

El crimen organizado no se ha recluso. Los grupos criminales se disputan el control territorial en distintas demarcaciones del país y en al menos 11 estados se ha incrementado sensiblemente la violencia, de manera más acentuada en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua. Amén de que en el primer semestre de 2020 se han registrado desplazamientos de alrededor de 13 mil 600 personas de sus hogares y localidades por conflictos y violencia, sin contar los desastres naturales. En tanto que el Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza al gobierno federal mediante actos que pudieran interpretarse como declaración de guerra: por ejemplo, atenta contra el secretario de seguridad pública del gobierno de la Ciudad de México, bastión político de la 4T, y éste responde congelando cuentas bancarias de los líderes de la organización criminal. El hecho es que con la 4T se han acumulado más muertes por violencia que en los gobiernos anteriores.

4. Crisis cultural y educativa: telecracia y desaprendizaje escolar

La contingencia sanitaria plantea un desafío para la impartición de la educación en todos los niveles durante el confinamiento. La respuesta ha sido la educación a distancia, mediante el uso de plataformas digitales y televisivas como el canal educativo emergente. El esquema de la educación digital favorece una educación sin escuelas y sin maestros. Los padres de familia asumen funciones pedagógicas y los alumnos afrontan déficit de aprendizaje.

El gobierno federal tomó la salida fácil para aliarse con los consorcios televisivos privados (Televisa, TVAzteca, Imagen y Multimedia), investirlos como medios de educación pública y transferirles cantidades millonarias de recursos públicos bajo el esquema denominado Aprende en Casa II. Por seis canales de televisión se transmitirán las clases del ciclo escolar 2020-2021 para preescolar, primaria y secundaria.

La desacreditada televisión privada, Televisa y TVAzteca, otrora ubicada en el núcleo duro de la «mafia del poder», es reconvertida por la 4T como nueva agencia de instrucción pública. Décadas atrás la crítica cultural de izquierdas señalaba a las televisoras como la instancia que por las tardes destruía lo que por la mañana construían las escuelas públicas, pero ahora se reconvierten en instituciones de programación y difusión educativa, que se agenciarán dineros públicos



El esquema de la educación digital favorece una educación sin escuelas y sin maestros. Los padres de familia asumen funciones pedagógicas y los alumnos afrontan déficit de aprendizaje.

por esa función y restañarán las finanzas menguadas de esos consorcios.

La transferencia de recursos públicos desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) significa una suerte de salvamento de la telecracia, que vivía momentos aciagos. Entraña una privatización encubierta de la educación pública, lo que significa un rescate a las televisoras privadas con recursos públicos. Los llamados tiempos oficiales del Estado no fueron retomados, y en su lugar se pagarán 450 millones de pesos para que se difundan esos contenidos, además de que se contratará a una empresa afiliada a TVAzteca para que elabore materiales educativos. Las televisoras atravesaban por una fuerte crisis de credibilidad, bajas audiencias y desvalorización de sus acciones, pero la medida gubernamental vino a subsanar esos problemas y a reposicionar a las televisoras en la sociedad enclaustrada.

Los pedagogos han advertido que la televisión no es el medio adecuado para educar, para enseñar, aunque es un medio útil para intentar de manera improvisada que el ciclo escolar no se pierda, que se consuman horas aprovechando el tiempo de los escolares. El esquema es unidireccional, la pantalla emite mensajes y entretiene.

Los maestros no aparecen, los contenidos no los diseña el magisterio y los estudiantes (unos 30 millones) se convierten en espectadores de las televisoras, sin contar a los maestros y padres de familia, que tienen que monitorear las sesiones o las tareas.

5. Crisis de gobernabilidad: la transformación sin sujeto y el retorno del presidencialismo

En un proceso de transformación social sustantivo es evidente que se afectan intereses, que brotan las inconformidades y disputas, y que se disuelven determinadas instituciones, se preservan algunas y se crean otras en aras de un proyecto; pero cuando este proyecto no existe o es confuso y ambiguo, y cuando simplemente se arrasa con instituciones sin regenerar las capacidades institucionales, los problemas son síntoma de la debilidad gubernamental para conducir un proceso genuino de cambio y los efectos pueden ser contraproducentes para los sectores sociales interesados en los procesos de cambio.

En el seno mismo del gobierno, los funcionarios de origen académico con conducta ética, han venido renunciando a su papel como secretarios

de Estado o funcionarios en tanto han denunciado abierta o veladamente inconsistencias, contradicciones, ocurrencias y corrupción dentro del gobierno: Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Víctor Manuel Toledo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Jaime Cárdenas, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), y Tonatiuh Guillén, Instituto Nacional de Migración (INM). Los renunciados son académicos que no consintieron o no aceptaron las políticas impuestas en su sector. Otras renuncias se han derivado de desacuerdos internos en el manejo de recursos o por incapacidades.

El talante personalista, concentrador y unipersonal del presidente López Obrador ha propiciado desacuerdos con los gobernadores. Un grupo de los cuales abandonó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y formaron una llamada Alianza Federalista, que luego tuvo como secuela la crisis en Chihuahua por el reparto del agua entre agricultores que defienden su acceso y el gobierno federal que quiere hacer un trasvase de millones de litros de agua para entregarlos a Estados Unidos, amparado en tratado de 1944, escaramuza que indujo la intromisión de la Guardia Nacional, que baleó a una pareja de manifestantes ocasionando la muerte de una persona.

En la trama de la reconstrucción del viejo presidencialismo, el gobierno de la 4T tiene como consigna suprimir las instancias de mediación política entre el Estado y la sociedad civil, y en consecuencia está desmantelando organismos autónomos, instituciones subrogadas, apoyos a organizaciones de la sociedad civil y fideicomisos en las más diversas materias, como ciencia, tecnología, cultura, derechos humanos, deporte, etcétera. Múltiples tensiones se han generado al dejar desprotegidos a los más disímiles sectores beneficiarios de bienes y servicios públicos, sin que se aclare cuál es el mecanismo que habrá de reconstruir y ampliar los derechos sociales.

En la picaresca política mexicana, los escándalos marcan los virajes, y la videoteca del escándalo ha resguardado la memoria política de los adversarios e irrumpe en la escena cuando se hacen ajustes de cuenta. En el marco de la llamada lucha contra la corrupción, el gobierno lanzó un video donde se muestra la entrega de dinero de funcionarios de Pemex a ayudantes de diputados panistas supuestamente como sobornos para la aprobación de la reforma petrolera en tiempos del gobierno de Peña Nieto, pero la respuesta no se hizo esperar y se difundió un video donde el propio hermano del presidente, Pío López Obrador, recibe dinero de David de León, entonces funcionario del gobierno de Chiapas, en el marco del pacto entre Morena y Partido Verde Ecologista, y ahora en funciones de responsable de Protección Civil con el gobierno de la 4T y propuesto para cubrir un instituto recién creado encargado de la compra de medicamentos. Los escarceos políticos terminaron provisionalmente, porque se presume de la existencia de más videos similares.

Los escándalos de corrupción no han sido ajenos a la 4T: van desde las denuncias de enriquecimiento ilícito de funcionarios que no asumen el voto de pobreza, como las demasiadas casas de Manuel Bartlett y las múltiples propiedades de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval. El muestrario del horror en un gobierno que pretende ser impoluto, honesto y anticorrupción, es preocupante: el videoescándalo de Pío López, hermano del presidente, la triangulación de dinero de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), los negocios del delegado de Jalisco en el sector salud, las compras del IMSS a empresas sancionadas, los negocios de los hijos de Bartlett con el IMSS y la política de adjudicaciones directas sobre los mecanismos de licitación.¹⁵ Además del robo hormiga en los bienes decomisados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y el extraño caso de la rifa del avión presidencial donde se pudieron haber desviado recursos públicos para la compra de boletos.

El simulacro de la rifa del avión presidencial, que no se rifó, sino que lo rifado fue un monto de dinero equiparable al precio del avión, en tanto que el avión, que supuestamente estaba en rifa, sigue en venta al mejor postor, mientras que en la rifa se canalizaron recursos públicos no bien precisados para comprar boletos y se recaudó dinero entre los magnates del país para comprar otra tajada de boletos. Este episodio alrevesado es una metáfora de la 4T: ocurrente e improvisada, sin proyecto ni sujeto de la transformación.

Al tiempo en que la política de comunicación descansa en la voz de un solo hombre, el presidente, con sus conferencias matutinas, en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) estalló una huelga debido a la política de despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo, que en buena medida obedecen al mandato de despidos y austeridad gubernamental.

En este clima, emergen distintas manifestaciones en diversas partes de la República, como

¹⁵ Diego Badillo, «Recuento de casos de corrupción en la 4T», *El Economista*, 30 de agosto de 2020, en <https://www.economista.com.mx/politica/Casos-de-corrupcion-en-la-Cuarta-Transformacion-20200830-0001.html>

el movimiento de feministas y su toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o la toma de vías del tren por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En ese contexto, emerge en la escena pública un nuevo actor político de la derecha confesional y empresarial denominado Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) que tomó el Zócalo y demanda la renuncia del presidente.

La descomposición del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente, y su manifiesta incapacidad para nombrar a su dirigencia, por tercera ocasión consecutiva, es otro botón de muestra. Morena no es realmente un partido, pero tampoco un movimiento, es un aparato electoral que funge como agencia de colocación. De ahí que los candidatos a la presidencia partidaria se lancen acusaciones de corrupción, arribismo e intereses anticipados de sucesión presidencial.

Preponderancia de los servicios públicos y los derechos sociales sobre la estatalidad y soberanía del Estado

En el ámbito de los servicios públicos, lo público es irreductible a lo estatal. Los servicios públicos no son los servicios del Estado, en el sentido de que el Estado pueda disponer de ellos a su antojo, tampoco son una proyección del Estado, más bien, como su nombre lo denota, son públicos en el sentido de que están al servicio del público. En tanto que lo público no remite sólo a la administración estatal sino a toda la colectividad de ciudadanos. Representan una obligación positiva del Estado hacia sus ciudadanos.

Lejos de ser un favor del Estado, como se deriva de las expresiones «Estado providencia», «Estado benefactor», «Estado social» o «Estado progresista», los derechos sociales son un deber del Estado, de los gobernantes hacia los gobernados, es decir, la primacía es de los deberes de los gobernantes para con los gobernados. El Estado no es un paterfamilias dadivoso que provee recursos para la subsistencia de sus hijos e hijastros ciudadanos, sino que es una estructura de poder, una macroinstitución, que gestiona el conflicto social y se aprovisiona de recursos mediante impuestos, deuda o ganancias, cuyo sustrato es el valor social generado por el trabajo colectivo. De tal suerte que la omisión, contracción o negación de los servicios públicos significa una deuda social del Estado, como

cuando el Estado deja de proveer recursos suficientes para cubrir con suficiencia la salud pública o la educación pública.

En definitiva, en la fórmula de los servicios públicos, más que una manifestación del poder del Estado, expresan una limitación del poder gubernamental. Simbolizan una conquista social, materializados en derechos sociales. En tal sentido, los gobernantes son servidores de los gobernados. Así es que se puede hablar de responsabilidad social del Estado, en alusión a la obligación que se impone a los gobernantes y a los agentes de los gobernantes. Por tanto, los servicios públicos recuperan el principio de solidaridad social, no en el principio de soberanía, que resulta incompatible con el de responsabilidad pública.

La noción de servicio público es preservada por la ciudadanía en virtud de que representa un derecho fundamental, inclusive una conquista social procedente de luchas obreras y sociales, y no una concesión graciosa del poder estatal. En tal sentido, el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos es la contraparte del deber de los representantes del Estado de otorgar los servicios públicos.

La relación de la ciudadanía con los servicios públicos no significa una adhesión condescendiente a la autoridad o al poder estatal, como publicitan los gobiernos en turo, sino más bien un vínculo con los bienes y servicios públicos cuya función es satisfacer las necesidades concretas de la sociedad, como sucede, por ejemplo, con los servicios sanitarios o educativos. Además, representa un apego al sentido de cobertura universal que trasciende las diferencias y segregaciones, distante del repliegue identitario del nacionalismo, y testifica una sensibilidad social sobre las desigualdades y problemas que aqueja a la población en diversos países. 🇲🇽